



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: NICOLÁS EDUARDO ARANGO YEPES  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 016 2021 00014 01  
Sentencia: S-058

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 02 de agosto de 2022, puesto que la misma no fue recurrida por las partes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

NICOLÁS EDUARDO ARANGO YEPES demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de

continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos, la devolución a Colpensiones de todas las sumas de dinero, así como la reactivación de la afiliación a esa entidad. Pretende además se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas.

## **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que solicitó a PROTECCIÓN S.A. la proyección de su mesada pensional dentro del Régimen de Ahorro Individual -RAIS-, al no obtener contestación procedió con una simulación del cálculo de la prestación arrojando como resultado, al cumplimiento de los 62 años de edad, una pensión por el valor de \$2.676.771, y en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPMPD- alcanzaría un valor aproximado de su mesada en el año 2020 de \$5.020.902, siendo el doble del valor antes descrito, y más beneficiosa la prestación en dicho régimen. Dice que solicitó a Colpensiones reactivar su afiliación al RPMPD el 09 de marzo de 2019 sin obtener respuesta a la petición.

Manifiesta que de la historia laboral de Colpensiones se tiene que comenzó a cotizar al sistema de pensiones en el RPMPD; se trasladó al fondo privado porque le prometieron mejores condiciones de pensión, donde se le indicó además que resultaba conveniente afiliarse a ese fondo por tener más prerrogativas que en el de Prima Media. Indica que el fondo privado PROTECCIÓN S.A. al momento del traslado le aseguró que se pensionaría más rápido y que podía lograr un mejor valor en la mesada pensional; que no le brindó una asesoría completa, detallada y oportuna, contrario a ello, fue confusa, engañosa e imprecisa, pues se le dijo incluso en el año 2015 que tendría una pensión por el valor de \$4.317.477 y luego le indicaron que era por el valor de \$797.240, dos valores diametralmente diferentes, siendo claramente inducido a error, por lo que no ha

existido un consentimiento informado respecto del traslado del régimen de prima media al RAIS.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES dice que acepta la afiliación del demandante al ISS y la solicitud de traslado presentada ante esa entidad. Sobre los demás hechos, manifiesta que no le constan pues se trata de situaciones que se encuentran por fuera de su conocimiento y dominio. Se opuso además a las pretensiones porque el acto de afiliación se encuentra ajustado a derecho, es válido y ha surtido plenos efectos jurídicos.

Como excepciones propuso, aspectos legales y financieros que impide el retorno del demandante al RPMPD, improcedencia de traslado de régimen pensional cuando quien demanda se encuentra pensionado, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, prescripción y/o caducidad de la acción, imposibilidad de condena en costas, innominada o genérica.

Por su parte PROTECCIÓN S.A. dijo que no le consta la fecha de afiliación al RPMPD y la solicitud de traslado presentada a Colpensiones. Sobre los demás hechos, indica que no son ciertos por cuanto brindó al demandante una asesoría integral y completa respecto a todas las implicaciones de su decisión, sin omitir información e indicando claramente todas las características, regulaciones del RAIS y su funcionamiento, así como los rasgos diferenciados respecto al RPMPD, señalando con claridad la forma de construir la pensión en cada uno de ellos, sin que pueda hablarse de situación más ventajosa o desventajosa pues son diferentes y excluyentes, correspondiéndole al afiliado realizar su propio juicio de favorabilidad, tal y como lo hizo el demandante. Sobre la reasesoría de 2015, manifiesta que se le informó al actor que no le convenía

permanecer en PROTECCIÓN, sin embargo, el demandante decide aplazar su decisión.

Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restituciones mutuas en favor de la AFP: Inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 02 de agosto de 2022, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

**“PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ** la afiliación de **NICOLAS EDUARDO ARANGO** realizada a **PROTECCIÓN S.A.** el 30 de agosto de 1995. En consecuencia, **DECLARAR** que para todos los efectos legales el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual, y siempre permaneció en el régimen de prima media.

**SEGUNDO:** Se **ORDENA** a **PROTECCIÓN S.A.** trasladar al demandante, al régimen de prima media administrado por **COLPENSIONES**.

**TERCERO:** Se **ORDENA** a **PROTECCIÓN S.A.** devolver, al régimen de prima media, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante, incluyendo, las cotizaciones de forma completa, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos de administración ni los aportes de solidaridad ni ningún concepto, pues se considera que en ningún momento debió producir efecto jurídico alguno dicho traslado. Esta erogación deberá realizarla con cargo a sus propios recursos.

(...)

**CUARTO:** Se **ORDENA** a **COLPENSIONES**-, reactivar la afiliación del demandante y recibir todos los dineros que sean trasladados por **PROTECCIÓN S.A.** Se autoriza a **COLPENSIONES** a realizar un cálculo de equivalencia de los dineros recibidos desde el RAIS, de forma tal que no le genere perjuicio alguno recibir al demandante al momento de cumplir con las obligaciones pensionales a su cargo.

(...)”

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Se advierte que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término legalmente concedido, el apoderado judicial de **Colpensiones** presentó alegatos de conclusión diciendo que, el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a diez años o menos de la edad mínima pensional, sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición, por lo que la declaratoria de ineficacia de traslado de un contingente de personas con características diferentes a las antes referidas, pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema, a la par que pondría en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados (Arts. 48 y 334 de la Constitución Política de Colombia), razón por la cual solicita sea denegado el traslado del demandante. Por otro lado, dice que en el evento en que la judicatura opte por acceder a las pretensiones de la demanda, solicita que se ordene a PROTECCIÓN S.A., para que, a favor de Colpensiones, realice la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el RAIS.

Por su parte el apoderado judicial del **demandante** en los alegatos de conclusión solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia acogiendo las pretensiones de la demanda, toda vez que,

PROTECCIÓN S.A. no cumplió con su obligación de brindar información cierta, completa y oportuna al momento del traslado. Cita las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SL 1688 de 2019, SL 5686 de 2021 en la que se insiste sobre el deber de la administradora de información y se determina que la reasesoría no sana el incumplimiento de la AFP de su deber de informar, porque la oportunidad de información se juzga al momento del acto jurídico de traslado.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, toda vez que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* el Sr. NICOLÁS EDUARDO ARANGO YEPES nació el 09 de julio de 1963; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS- y realizó cotizaciones allí, el 01 de septiembre de 1988; y *iii)* el 30 de agosto de 1995 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PROTECCIÓN S.A. entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

#### **Ineficacia del traslado.**

La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de

múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>1</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no*

---

<sup>1</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 *“ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”*

*podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a*



*llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, la persona encargada de recursos humanos de la compañía en la cual trabajaba –ROYAL–, les recomendó que se pasaran para el fondo privado, siendo entonces una orientación de la compañía hizo el traslado. Si bien pudo haber recibido algunas explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual, como lo relacionado con el bono pensional, o rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello fue con posterioridad al momento de la afiliación inicial al fondo privado, según se extrae, específicamente en el año 2000. Sobre la reasesoría realizada por PROTECCIÓN S.A. en el año 2015, insiste en que la “niña” que lo atendió le dijo que los dos fondos (Colpensiones y Protección S.A.) *“me daban la misma mesada, la diferencia era muy pequeña no se justificaba devolverme”*, reasesoría que advierte la Sala no tendría influencia en el acto de traslado inicial, en la toma de decisión primigenia, pues el deber de información se califica al momento del acto jurídico del traslado de régimen, que en este caso se entiende que fue para el mes de agosto de 1995.

De lo anterior no se deriva –entonces– que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva*

*quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador".*

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en los alegatos de conclusión en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Advierte asimismo la Sala sobre la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a devolver.**

De otro lado, en cuanto a ordenar también la devolución de las cuotas de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, y demás conceptos tema tratado por el apoderado judicial de COLPENSIONES en los alegatos de conclusión, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelven a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en*

que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas y/o gastos de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el Sr. NICOLÁS EDUARDO estuvo vinculado a esa entidad.

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según fue solicitado por COLPENSIONES con la contestación a la demanda, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

El Juez de Primera Instancia en la parte considerativa de la sentencia fue claro en advertir que los conceptos a trasladar a Colpensiones debían ser indexados - las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima. Sin embargo, en la parte resolutive no fue consignado específicamente esta orden judicial, por lo tanto, en este punto será ACLARADA la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, tampoco resulta procedente en este caso la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamados a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado no pueden estar sometidas a la prescripción.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el día 02 de agosto de 2022, y la **ACLARA** en el sentido de que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e54f5c90c76f57080300a80241f6d40be0bd68744faca3554b10ce95c5f88361**

Documento generado en 09/03/2023 02:51:50 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**